

atentados cometidos; ni podría, en fin, determinarse que las víctimas de esos atentados tienen derecho á la reparacion correspondiente.

«Para que el congreso pueda satisfacer estas condiciones, que á juicio de la comision, son las mas importantes que entraña el artículo 5º del plan de Ayutla, es absolutamente preciso que las facultades de que se halla investido sean, no las de un legislador que confirma ó deroga las leyes que examina, pues esta facultad reside hoy en el ejecutivo, sino las de un juez que examine todos los actos de la administracion dictatorial, y que sin mas ley que la justicia, y sin otro norte que el de la conveniencia pública, los califica y los legitima, los anula y declara insubsistentes, extendiéndose hasta á declarar responsables á sus autores. Si se meditan bien estas circunstancias, de ellas resultará confirmada la opinion que al principio ha enunciado la comision.

«Y si el congreso representa un jurado nacional cuando falla sobre los actos que revisa, necesario es deducir que sus fallos son inapelables y que por lo mismo no están sujetos á observaciones despues que han sido pronunciados. Haga en buena hora, valer el ejecutivo su opinion en los casos en que lo crea útil ó necesario; lo cual será siempre visto con agrado por el congreso, porque esto contribuirá al mayor esclarecimiento de los hechos, y por consiguiente al mejor acierto de sus resoluciones; pero que esto sea al tiempo de los debates, mientras se delibera, y para ello tienen los secretarios del despacho libre acceso y voz en la cámara; pero esta facultad del ejecutivo debe terminarse desde el momento en que pronunciado el juicio de la nacion sobre un asunto por medio de sus representantes, no queda á aquel otra mision que la de hacerlo cumplir, como la tiene para hacer cumplir los fallos de los demas tribunales.

«Demostrado, como cree la comision estarlo, que no hay lugar á admitir las observaciones del ejecutivo en las declaraciones del congreso, emanadas de la facultad revisora que se refiere al artículo 5º del plan de Ayutla, por no tener el carácter de ley, pues si lo tuvieran, con arreglo á los principios del derecho constitucional serian admisibles, podría terminar aquí el dictámen; pero juzgando que no es inoportuno entrar en la segunda cuestion, esto es, en el examen de si las observaciones del ejecutivo descansan en principios de justicia, solicita la atencion del congreso hácia las razones que someramente expone.

«En sentir del ejecutivo, la resolucion del congreso declarando insubsistente el artículo 1º del decreto de 1º de Mayo de 1853, trae el inconveniente de que esa declaracion solo comprende á una parte de los agraciados por servicios en la guerra con los Estados- Unidos, que son los coroneles y generales efectivos, dejando insubsistentes los que se refieren á los empleos de teniente coronel á subteniente inclusive, que no han podido ser objeto de la revision del congreso, por haber sido expedidos por una administracion que obró en virtud de facultades constitucionales. Cree la comision que la misma nota del ejecutivo envuelve la mas satisfactoria respuesta. Un juez no puede fallar sino sobre los casos de que le toca conocer. Esto es lo que ha hecho el congreso, y el inconveniente que ha hecho valer el ejecutivo, en nada altera la justificacion con que ha procedido el congreso en su resolucion. Para determinar si el congreso procedió bien en el asunto de que se trata, la cuestion debió enunciarse en estos términos:

«¿Se fundó en principios de justicia el decreto que hizo efectivas las propuestas de generales y jefes presentadas al congreso en 1847?»

«La comision no vacila en decir que no, y para hacerlo se funda en las siguientes consideraciones:

«1ª Esas propuestas no fueron aprobadas por la representacion nacional, á pesar de ha-

ber habido seis diferentes legislaturas desde 1847 en que se hicieron, hasta 1853 en que cesó de regir el orden constitucional.

«2ª La historia de la guerra nos demuestra que no hubo en favor de los agraciados ninguno de los hechos que la Ordenanza califica de meritorios para obtener el ascenso, ya sea que se examine de un modo colectivo ó de un modo individual: de un modo colectivo no los hubo, porque en todas las batallas fué la fortuna adversa á nuestras armas, aun cuando en algunas de ellas tuviéramos fuerzas superiores á las del enemigo; tampoco los hubo individualmente, porque si entre los individuos de la clase superior del ejército hubiera habido algunos que se hubiesen distinguido por hechos notables, dignos de premio, lo hubieran obtenido, como lo obtuvo el general D. Rómulo Díaz de la Vega, por el mismo congreso ante quien fueron hechas las propuestas en cuestion.

«Así es que el congreso por estas consideraciones debia fallar y falló la insubsistencia del artículo 1º del decreto de 1º de Mayo de 1853, y el alegato que se hace de que no corren la misma suerte los empleos de teniente coronel á subteniente, que fueron otorgados desde 1847, no cree la comision que pudiera servir de fundamento para declarar subsistentes los que con arreglo al artículo 5º del plan de Ayutla han quedado sometidos á revision.

«Por estas razones, la comision concluye sujetando á la deliberacion del congreso la siguiente:

PROPOSICION ECONOMICA.

«No son de admitirse las observaciones que hace el ejecutivo en su nota de fecha 9 del actual, á la declaracion de insubsistencia de los artículos 1º, 3º, 4º y 5º del decreto de 1º de Mayo de 1853, relativo á recompensas por servicios prestados en la guerra que sostuvo la República con los Estados- Unidos del Norte.

«Sala de comisiones del congreso extraordinario constituyente. México, Junio 16 de 1856.—Mata.—Muñoz.—G. Granados.»

La mesa dispuso que quedara como de primera lectura; reclamado el trámite y puesto á discusion, lo atacó el Sr. BARRERA, diciendo que se trataba de una cuestion económica, y que aun en tiempos constitucionales, cuando habia observaciones del ejecutivo, al presentarse dictámen se señalaba dia para la discusion.

El Sr. AGUADO replicó, que eso se hacia cuando era incuestionable el derecho del gobierno á hacer observaciones; pero que como ahora este es precisamente el punto en cuestion, creia que debia procederse conforme á reglamento, y que no habia necesidad de festinar el asunto.

El congreso declaró insubsistente el trámite, y se acordó que el dictámen fuera discutido en la sesion siguiente.

Puesto á discusion el dictámen relativo á las observaciones del gobierno, preguntó el Sr. Prieto si se habia dado aviso al gobierno de que iba á abrirse este debate.

El Sr. GUZMAN contestó: que por un olvido no se habia avisado al ministerio; pero que estando presente el señor ministro de la guerra, podia tomar parte en la discusion.

El Sr. SOTO, ministro de la guerra, expuso: que cuando se pasó al gobierno el decreto del congreso, fué detenidamente examinado, y creyéndose que ofrecia algunos inconvenientes, el gobierno resolvió hacer una sincera manifestacion á la asamblea, sin pretender calificar de injusto su acuerdo, ni mucho menos hacer observaciones, pues la nota que habia firmado no tenia mas carácter que el de aclaracion ó advertencia.

El señor ministro, con notable moderación y prudencia, entró en la cuestión del caso particular á que las observaciones se referían, y sus palabras fueron oídas con bastante aprobación.

El Sr. GARCIA GRANADOS sostuvo el primer dictámen de la comisión de guerra, explicando que la insubsistencia acordada por el congreso, de ningún modo se refería á los despachos concedidos en 1847, sino simplemente á los que dió Santa-Anna, y que no quisieron aprobar los congresos constitucionales.

El Sr. GUZMAN está de acuerdo con las ideas de la comisión; sostiene que fué justa la revisión hecha por el congreso, y que el gobierno no ha tenido razón en sus observaciones, puesto que se han anulado los despachos concedidos por la dictadura, y no los que expidieron los gobiernos constitucionales, y que el congreso comprende muy bien que su facultad revisora no alcanza á épocas anteriores al gobierno de Santa-Anna. Pero no cree que la parte resolutive del dictámen llene su objeto, y desea que se consulte de una vez la declaración expresa de que el ejecutivo no tiene facultad de hacer observaciones.

El Sr. MATA explica su modo de entender la facultad revisora; cree que las resoluciones del congreso tienen mas bien el carácter de fallo que de ley, y que por lo mismo no están sujetas á las observaciones del ejecutivo. Pero como la comisión ha tenido que dictaminar sobre un caso especial, no le tocaba consultar la resolución del punto general. Tratándose de la facultad revisora, el gobierno, por un error, creyó que podía hacer observaciones, fundándose acaso en la práctica de nuestro antiguo derecho constitucional. Equivocado el gobierno, el acuerdo económico que se discute, es la mejor respuesta que se puede dar á su comunicación, y si el dictámen se pasa al ejecutivo, él comprenderá que el espíritu de la asamblea está por negarle la facultad de hacer observaciones, y en el caso improbable de que en otra vez hubiera nuevas observaciones, el congreso lo allanará todo con no admitirlas. Expresa, por último, la duda de la forma que deba darse á una resolución general; pues si ha de ser ley, el congreso no es legislador, y punto tan grave parece que no es propio de un acuerdo económico.

El Sr. GUZMAN insiste en sus ideas anteriores; declara que busca la verdad, sin cuidarse de apariencias; califica de insuficiente el dictámen, y excita á la comisión á que lo retire y consulte una resolución definitiva.

El Sr. ZARCO dice, que le es sensible atacar un dictámen con cuyas ideas principales está de acuerdo, y cree que la comisión, al no consultar una resolución general, pensó que debía limitarse al exámen del caso particular que dió origen á las observaciones; pero que de aquí resultaba que el artículo con que concluía el dictámen, no correspondiese á la dignidad de la asamblea, ni condujese á un resultado definitivo. Creyó que las dificultades que se pulsaban consistían en que el congreso se estaba ocupando de un caso particular, antes de resolver el punto general de si está ó no en las facultades del ejecutivo hacer observaciones á las resoluciones de la asamblea: dijo que la verdad de las cosas era que las observaciones del Sr. Soto habían sido admitidas, habían pasado á la comisión, como si el gobierno hubiera tenido derecho de hacerlas, habían provocado un nuevo dictámen, y hacían que el congreso volviera á considerar en nuevo debate, lo que ya antes había resuelto, irregularidad que consistía en haber dejado pendiente la cuestión principal.

Acogiendo con gusto las palabras del señor ministro de la guerra, porque le parecen francas, leales y sinceras, notó que el mismo gobierno no sostenía el derecho de hacer observaciones; pero añadió que los nombres importaban poco, y que ya se llamen observaciones ú objeciones, ya sean advertencias, consejos ó súplicas, el hecho es que el gobierno

ha suspendido la publicación de un decreto del congreso, y que consentir que esto pueda repetirse, equivaldría á concederle lo que se llama veto suspensivo, y que por lo mismo es menester llegar de una vez á una resolución definitiva.

Entrando despues en la cuestión del veto, dijo que sus defensores invocan los principios del derecho constitucional; principios que no son absolutos y que no son adecuados á la presente situación, pues la misión del ejecutivo, lo mismo que la del congreso, es esencialmente revolucionaria. No cabe en los principios del derecho constitucional un poder ejecutivo, revestido de facultades omnímodas, y en el que reside la atribución legislativa.

El plan de Ayutla encomendó al congreso la constitución, y se la encomendó á él solo sin sujeción á ninguna otra autoridad; le encomendó á él solo la revisión de los actos de Santa-Anna, y le encomendó también la revisión de los actos del gobierno actual. En ningún caso, pues, son admisibles las observaciones del gobierno, porque á él no le toca hacer la constitución, porque á él no le da parte el plan de Ayutla en la revisión de los actos de Santa-Anna, y porque tratándose de sus propios actos, no puede revisarlos él mismo; y si en este punto se admiten observaciones, las habrá siempre, pues ya uno de los ministros ha dicho en el congreso que el gabinete cree buenas todas sus leyes y disposiciones, y que si no, no las daría.

Añade que insiste en que se llegue á una resolución definitiva, porque aunque tiene plena confianza en las palabras del señor ministro de la guerra, quiere evitar todo conflicto en lo de adelante, y nadie le responde de que no haya cambio de ministerio, y concluye observando que la comisión parece detenerse en cuestiones de mera fórmula, dudando si la declaración que se haga ha de tener carácter de ley, ó ha de ser acuerdo económico. Esta cuestión le parece secundaria, tanto mas cuanto que del mismo modo que la comisión resuelve un caso particular, puede resolverse el punto general.

La comisión añadió un segundo artículo, consultando que el dictámen con su parte expositiva se trascriba al gobierno, y el Sr. MATA cree que esto bastará á satisfacer los deseos de los impugnadores, pues así el gobierno comprenderá que el congreso le niega la facultad de hacer observaciones.

Explica despues que la comisión se ha ocupado del punto general, que ha tratado la cuestión principal; pero que al mismo tiempo creyó de su deber y digno del decoro de la asamblea, ocuparse del caso particular y demostrar que se había procedido con justificación al revisar el decreto de Santa-Anna.

El dictámen fué declarado sin lugar á votar por 48 señores contra 42, y se acordó que el negocio volviera á la comisión.

Se puso á discusión el dictámen¹ de la comisión de justicia, declarando insubsistente el decreto de Santa-Anna que anuló los de varias legislaturas sobre salinas, montes y pastos, y despues de las explicaciones que dió el Sr. BARRERA como individuo de la comisión, se declaró haber lugar á votar por 78 señores contra 5, y el artículo fué aprobado por 74 contra 6.

Se aprobó un dictámen de la comisión de justicia consultando que se archive el expediente relativo al litigio sobre las aguas de San Juan Teotihuacan.

Previo dictámen de la comisión de peticiones, pasó á la investigadora de fomento una exposición de los fabricantes de Jalapa, pidiendo se derogue el decreto de Santa-Anna que gravó con impuestos su industria; á la de justicia pasó una solicitud de D. Victoriano

¹ Véase la página 740.

Franco Martínez sobre el arrendamiento de la nieve, y á la de industria una representación del pueblo de San Bartolomé del Rincon, quejándose de los abusos de los propietarios.

Derecho de propiedad. Voto del Sr. Arriaga. En 23 de Junio de 1856, se dió cuenta con una nota del ministerio de gobernacion, avisando quedar sancionado el decreto del congreso que restituye al ayuntamiento de Veracruz la parte de sus bienes de que arbitrariamente lo despojó una orden de Santa-Anna.

Se aprobó la minuta de decreto, declarando insubsistente el de Santa-Anna que anuló los de varias legislaturas sobre terrenos salinos, pastos y montes.

Prestó el juramento de estilo el Sr. Ochoa Sanchez, diputado por Jalisco, introduciéndolo al salón los Sres. Langlois y Arias.

El Sr. ARRIAGA, como miembro de la comision de constitucion, presentó el siguiente voto particular sobre el derecho de propiedad.

«Señor:

«En la parte expositiva del proyecto de ley fundamental leida al soberano congreso en la sesion del 16 del corriente, se ha manifestado, que sin embargo de no haber creido conveniente dar lugar en el cuerpo del dictámen á mis ideas y proposiciones, que tenian por objeto remediar en lo posible los grandes abusos introducidos en el ejercicio del derecho de propiedad, no por eso la comision consideraba inútil analizarlas y fundarlas. Los mas crasos errores proceden siempre de un principio de verdad que solo una discusion libre y franca desenvuelve, poniéndolo en su verdadero punto de vista.»

Observaciones del gobierno á los decretos del congreso. En 25 de Junio de 1856, tuvo primera lectura el siguiente dictámen de la comision especial, consultando que no está en las facultades del gobierno hacer observaciones á los decretos y resoluciones del congreso.

«Señor:

«La circunstancia de haber hecho el ejecutivo observaciones á uno de los decretos expedidos por el soberano congreso en uso de su facultad revisora, movió á un diputado á pedir que una comision especial dictaminara sobre si son de admitirse y está en las facultades del gobierno hacer objeciones á los decretos y resoluciones del congreso constituyente.

«Esta proposicion, presentada el 11 del actual, ha pasado por todos los trámites de reglamento, y previo dictámen de los ilustrados miembros de la primera comision de gobernacion, ha sido aprobada en la sesion de ántes de ayer, recayendo en los que suscriben, el inmerecido honor de formar la comision especial, y el deber de presentar dictámen dentro de tercero dia.

«Mientras este asunto pasaba por los trámites de reglamento, el congreso tuvo á bien declarar sin lugar á votar un dictámen de su celosa é inteligente primera comision de guer-

ra, que se referia al caso particular en que tuvieron lugar las observaciones del ejecutivo, y esto, á pesar de las sinceras explicaciones que dió aquí mismo el señor ministro de la guerra, declarando que no estaba en el ánimo del gobierno creerse con derecho á observar ú objetar las resoluciones de la asamblea, y que sus observaciones no tenian mas carácter que el de simple aclaracion ó advertencia.

«Lo que ha pasado, pues, en este negocio nos parece un indicio seguro de que el congreso desea llegar á una resolucion definitiva, que evite toda dificultad en lo de adelante, y que salve la integridad de las atribuciones que le han encomendado los pueblos.

«Los que suscriben, para seguir el espíritu del congreso, y corresponder á la confianza que les ha dispensado, han creido deber prescindir del caso particular de las observaciones del señor ministro de la guerra, y limitarse á examinar el punto general de si hay un poder en el país, en la organizacion provisoria que le dió el plan de Ayutla, que tenga facultades para hacer observaciones ú objeciones á los decretos y resoluciones del congreso; para retardar ó suspender su publicacion como ley del país; en una palabra, si los actos de la asamblea están sujetos al veto absoluto ó suspensivo, al ejercer su facultad constituyente, ó al revisar los actos del actual gobierno, ó los de la ominosa dictadura que fué derrocada por la revolucion.

«Desentendiéndonos de vanos juegos de palabras, debemos decir que realmente se trata de la cuestion del veto, llámense enhorabuena observaciones ó advertencias los inconvenientes que ponga el ejecutivo á la expedicion de los decretos del congreso.

«Para averiguar si realmente el ejecutivo tiene esta facultad, que aun en sistemas constitucionales ofrece grandes dificultades, porque suele ser un medio poderoso para destruir las libertades públicas, para nulificar á las asambleas que representan al pueblo, y restaurar poco á poco la tiranía y el despotismo, la comision no ha recurrido mas que al plan de Ayutla, modificado en Acapulco, porque no hay otra ley política en el país, y porque este plan, adoptado por la nacion, y en virtud del que existe hoy el congreso y el ejecutivo, es la única norma de nuestro derecho público, mientras volvemos á un orden constitucional.

«Conforme al artículo 5º de dicho plan, el congreso se ocupará *exclusivamente* de constituir á la nacion bajo la forma de República representativa popular, y de revisar los actos del gobierno de Santa-Anna, así como tambien los del ejecutivo provisional. Las atribuciones del congreso le son exclusivas, no puede dividir las con ningun otro poder, ni hay quien pueda limitarlas, restringirlas ó modificarlas.

«El artículo 3º del plan, establece que el presidente sin otra restriccion que la de respetar inviolablemente las garantías individuales, quedará desde luego investido de amplias facultades, para reformar todos los ramos de administracion pública, para atender á la seguridad é independencia de la nacion, y para promover cuanto conduzca á su prosperidad, engrandecimiento y progreso. De esta amplitud de facultades, ni remotamente puede inferirse que se extienda hasta poder objetar los decretos y acuerdos de la asamblea; pues muy lejos de esto, el plan de Ayutla expresamente sujeta los actos todos del gobierno á la revision del congreso, siendo la verdad que investido el presidente de la atribucion legislativa, el veto absoluto, el veto que puede anular y derogar la ley sin mas guía que la conveniencia pública, reside en el congreso. Se dice que esto es una extraña novedad en el derecho público; que se han invertido los términos; que otra cosa disponen las constituciones de otros países, y las que ántes han regido en el nuestro; pero se olvida que estamos pasando por un período de transicion, que el plan de Ayutla dió al país una organizacion